

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Villanid del Socorro Echavarría Herrera
DEMANDADO	AFP Protección S.A. y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 011 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 31005 011 2020 00360 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro.247 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado afiliada. Compatibilidad pensión riesgos laborales y vejez común
DECISIÓN	Revoca y confirma

En la fecha, **doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Villanid del Socorro Echavarría Herrera** contra la **AFP Protección S.A. y Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **011 2020 00360** 01.

Auto

En los términos de la documental allegada a esta instancia, se reconoce personería a la abogada **Liliana Chaves Ortega**, para continuar con la defensa judicial de Colpensiones.

Sentencia

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **29**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Se pide por la actora la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS a través de Protección S.A., y se le tenga siempre inmersa en el RPM. En consecuencia, se ordene a la AFP devolver a Colpensiones los aportes efectuados, con la obligación de esta última entidad de recibir los recursos e incorporarlos en la historia laboral, para que con ello se reconozca y pague pensión de vejez bajo la regulación general, con mesadas retroactivas. También se solicitan intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio indexación y condena en costas.

En sustento de ello se afirma que, la actora nació el **05 de septiembre de 1959**, arribando a 57 años en la misma calenda de 2016. Se vinculó al sistema pensional el 10 de noviembre de 1986 realizando aportes al entonces ISS. Luego de ser abordada por un asesor comercial de la AFP Colmena S.A. el **09 de mayo de 1994**, suscribió formulario de traslado, sin que se le brindara explicación de su situación pensional, ni se le hicieran proyecciones y tampoco le dieron a conocer el derecho de retractor, ventajas y desventajas de la movilidad, no se analizó de manera puntual si situación, no se le explicaron las modalidades de pensión, la incompatibilidad con otros ingresos de la garantía mínimo, ni formas de cálculo de mesadas, y tampoco el límite de 10 años para movilidad al régimen anterior, quedando así viciada su voluntariedad por

error en la causa. Agrega que para la fecha de presentación de la demanda acumula mas de 1.300 semanas, último aporte para el 30 de abril de 2014. **Que le fue otorgada pensión de invalidez profesional por la ARL Sura.** El 31 de marzo de 2017 reclamó a Protección S.A. pensión de vejez y luego de dos años se le dio respuesta negativa, aduciéndosele que solo tendría derecho a la garantía mínima sin que esta fuera compatible con ninguno otro ingreso, pero de haber permanecido en el régimen público podría acceder a la prestación regulada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Puntualiza que solicitó a Colpensiones la ineficacia del tránsito al régimen privado. Quedando así agotada la reclamación administrativa.

En auto del 14 de julio de 2021, **se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, debidamente enteradas de la actuación las entidades convocadas allegaron escritos de contestación, así:

Colpensiones, de los hechos admite la fecha de nacimiento de la actora, la vinculación inicial al sistema pensional el 10 de noviembre de 1986 al entonces ISS, la posibilidad, en el evento de no haberse trasladado al RAIS, de obtener pensión de vejez bajo los supuestos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y la solicitud elevada a esa entidad para que se declarara la ineficacia de la movilidad. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones y propuso las **excepciones** de: improcedencia de la declaratoria de ineficacia o nulidad de la afiliación al RAIS, por no configurarse ningún vicio en el consentimiento; prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación e inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

AFP Protección S.A., tiene como cierta la fecha de nacimiento de la actora y que cuenta con más de 1.300 aportadas al sistema pensional, no le consta la vinculación a otro régimen. Sobre la afiliación a esa sociedad se dio luego de recibir asesoría objetiva, integra, clara y responsable sobre las características del RAIS y del RPM, indicándole rasgos diferenciadores como acumulación de capital en cuenta de ahorro individual a su nombre que le genera rendimientos de acuerdo al comportamiento del mercado, la posibilidad de pensión anticipada siempre y cuando financie con el saldo mesada superior al 110% del mínimo legal; la figura de la garantía de la pensión mínima de vejez, la posibilidad de obtener excedentes de libre disponibilidad, el factor herencial del capital, entre otros. Es insistente a lo largo de su argumentación en la debida ilustración. **Enfrentó** las pretensiones y propuso las **excepciones** de: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, innominada o genérica; reconocimiento de restituciones mutuas a favor de la AFP y dentro de esta, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y el porcentaje aplicado a seguro previsional cuando se declara la nulidad o ineficacia del traslado de régimen.

La primera instancia culminó con sentencia proferida el **20 de octubre** del año que avanza, en la que se desestimaron las excepciones propuestas, salvo la prescripción que afectó las mesadas causadas con anterioridad al 28 de septiembre de 2017; se declaró ineficaz la afiliación de la reclamante al RAIS – AFP Colmena S.A. hoy **Protección S.A.**, el **09 de mayo de 1994**, por la no acreditación del deber de información en los términos de la regulación vigente para tal calenda, ello con sustento en jurisprudencia especializada, citando apartes, entre otras, del pronunciamiento SL1055-2022; siendo la consecuencia que para

todos los efectos legales ha pertenecido al RPMPD. **Ordenó a la AFP** a restituir a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos, así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía de pensión mínima y los valores aplicados a seguros previsionales, rubros que deberá asumir con cargo a sus propios recursos y entregarse debidamente indexados, con relación de conceptos, discriminando valores, detalle pormenorizado de ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. El fondo público deberá recibir tales sumas y activar la afiliación de la señora **Villanid del Socorro Echavarría Herrera**, reconociéndole pensión de vejez con pago de mesadas a partir **28 de septiembre de 2017**, pues las anteriores se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción; 13 anuales, la que se liquidara con el IBL de toda la vida laboral y de los últimos 10 años, y al mas favorable se le aplicará tasa de reemplazo del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, ello porque si bien goza de pensión de invalidez, **la misma es de origen profesional, luego no existe incompatibilidad entre ambas prestaciones.** Las mesadas adeudadas se actualizarán mediante el mecanismo de la indexación. **Ordenó a Protección S.A.**, devolver a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el valor del bono pensional Tipo A pagado a favor de la demandante, debidamente indexado, para que así tal cartera pueda realizar la actuación de su cargo ante Colpensiones. Absolvió a los fondos de pensiones de las demás pretensiones y al Ministerio de todas las formuladas en su contra. Dispuso el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones y gravó con costas a Protección S.A., liquidando el monto de las agencias en derecho.

De la etapa de **alegaciones** ante esta instancia hizo uso **la apoderada judicial de Colpensiones**, rogando la revocatoria de la decisión, al considerar que los hechos de la demanda no contienen afirmaciones indefinidas al corresponder a supuestos concretos y limitados en el tiempo, por lo que era menester de la peticionaria cumplir con el despliegue probatorio, sin que pueda privilegiarse su inercia. Tampoco comparte el alcance que se da al artículo 1604 del Código Civil al no contener este una presunción de culpa, ni el establecimiento del estándar probatorio y disminución del peso demostrativo del formulario de afiliación por parte de la jurisprudencia especializada. Finalmente explica el porque se establecen periodos de carencia en la afiliación, para luego advertir que la actora se encuentra dentro de la restricción de los 10 años que trae el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, y pide acoger para efectos de la decisión, lo planteado en salvamento de voto a providencia SL3537-2021, del que transcribe apartes.

En el evento de mantenerse el veredicto, solicita mantener la devolución integra de conceptos debidamente indexados y la no imposición de costas, al ser Colpensiones un tercero ajeno al proceso.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la fecha de nacimiento de la demandante, **05 de septiembre de 1959**; su vinculación al RPMPD el **10 de noviembre de 1986**; su traslado a la AFP Colmena – hoy **Protección S.A.** con formulario suscrito el **09 de mayo de 1994**, marcándose la **casilla: traslado de régimen**, administradora anterior **ISS**. En historia laboral generada por

Protección S.A. el 13 de febrero de 2020, registra un total de **1.324,14 semanas**; 308,43 en bono pensional y **1.015,71 directamente aportadas al fondo privado**, número que coincide con el consignado en documento similar, con fecha de expedición **16 de enero de 2023**. En ambos eventos, última cotización para el ciclo abril de 2014.

Con ocasión de accidente laboral que sufriera el **17 de septiembre de 2010**, hecho que le generó una PCL de 63,81, **la ARL Sura**, mediante comunicación del 09 de agosto de 2012, le otorgó pensión de invalidez por tal riesgo a partir del **19 de julio de 2012, con mesada equivalente a \$633.815,00**, supuesto con fundamento en el que **Protección S.A.**, en escrito del 31 de marzo de 2017, le **negó** la garantía de pensión mínima a que podría acceder, argumentando **incompatibilidad entre ambas prestaciones**.

De acuerdo con el recuento realizado y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de la ineficacia del tránsito de la actora del RPM al RAIS efectuado el **09 de mayo de 1994**, y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el primero, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden. También se verificará la concerniente al reconocimiento de pensión de vejez por el fondo público y lo atinente a la restitución del bono pensional al Ministerio de Hacienda.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está antecedido de una

suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que el cambio debe estar precedido de la debida información y transparencia, **para el caso concreto** el formulario se suscribió en mayo de 1994, por lo que se estaba en la primera etapa de la regulación, entre otros arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales**, y suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado; sin que obre prueba de la debida ilustración por parte de la **AFP** sobre el funcionamiento, diferencias, ventajas, desventajas, forma de liquidar y modalidades de pensión en el RAIS, entre otros, bajo las reglas de la normatividad vigente para tal calenda, ni del debido acompañamiento durante el tiempo en que ha estado allí, **al punto que al emitirse pronunciamiento frente a los hechos se dice que no le consta la afiliación previa al régimen de prima media, a pesar de estar referenciado en el formulario en que se funda la defensa y en los documentos adosados como soporte de sus dichos, datos por demás relevantes para los estudios requeridos**, sin que obre entonces medio de convicción frente al particular y sin que tal omisión se subsane por el transcurso del tiempo.

Y es que no basta afirmar que al ser el sistema de pensiones de carácter público toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados, pues de un lado, se está ante un tema técnico que requiere manejo especializado, y por otro, es clara la

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, entre otras en sentencia SL2484-2022 cuando indica:

*... le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, **pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación [1] (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).***

Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros (artículo 11, literal b) de la Ley 1328 de 2009). Negrillas fuera del texto original.

Y en la SL1197-2021, señala:

*Así lo es, pues **en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos**, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. **Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.*** Negrillas extra texto.

Ni del formulario de afiliación se infiere la completa ilustración, así se asevera en sentencia SL4322-2022:

Se sigue de lo anterior que el simple diligenciamiento del formulario no supe en manera alguna el deber de información, como erradamente parece haberlo entendido el Tribunal y, mucho menos, con el nivel de calidad que la jurisprudencia ha venido exigiendo, ni resulta ser demostrativo de haberse satisfecho en debida forma el mentado deber (CSJ SL1741-2021 en la que se memoraron las sentencias CSJ SL1421-2019; CSJ SL4964-2018 y CSJ SL19447-2017), ni la suscripción de ese preimpreso remueve la obligación que le asistía a las AFP de cumplir con el requisito de brindar la debida información y de probarlo en el proceso, así como tampoco lo hace la aceptación en el interrogatorio de parte del demandante de haber recibido una información, pero no con las características y profundidad debidas.

Y en la misma providencia se expone que no es posible afirmar:

Que no se diga, tampoco que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.

Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; sin embargo, resultaría ser un desaguisado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021). Negrillas intencionales.

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en el mismo proveído se dice sobre el particular:

De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).

Y en sentencia SL1055-2022, se argumenta:

Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.

De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.

Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.

Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.

Reiterándose en la SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar ***libertad*** en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreando su inobservancia **la ineficacia del cambio de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022). Negrillas intencionales.

Por ser el precedente vigente, es el acogido por esta Sala de Decisión, **por lo que se confirma la declaratoria de ineficacia de la vinculación de la demandante al RAIS**, al igual que lo atinente a las

restituciones que debe hacer Protección S.A. a Colpensiones, por ajustarse a las reglas fijadas, entre otras, en las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022, SL554-2023 y SL1084-2023.**

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección al momento de la movilidad del Iss al fondo privado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, **decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida**, pues con el traslado íntegro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la permanencia en el fondo público.

En lo atinente al **derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media**, razón le asistió al a quo en las ordenes impartidas a Colpensiones, toda vez que la actora supera la edad de **57 años y las 1.300 semanas exigidas por el régimen general** (Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003), por lo que procede en la forma otorgada y bajo los parámetros indicados para liquidar el IBL y aplicar la tasa de reemplazo, ello porque la jurisprudencia especializada ha explicado, entre otras, en providencias del 1º de diciembre de 2009 radicación

33558; 23 de febrero de 2010, radicación **33265**; 22 de febrero de 2011 radicación **34820**; 13 de febrero de 2013, radicación **40560**; 12 de marzo de 2014, radicación **41547**, 24 de septiembre de 2014, radicación **43797**, que es posible otorgar dos pensiones en cabeza de una misma persona, cuando éstas, tenidas fuentes de financiación independientes, se hayan generado a partir de eventos completamente diferentes que traen como consecuencia el cubrimiento de dos contingencias totalmente diversas; como ocurre en el caso de la pensión de invalidez de origen profesional y la de vejez, dado que la primera ampara el riesgo de vejez, mientras que la segunda el de origen laboral; ambas tienen fuente normativa y de financiación distinta, siendo también diversa la entidad sobre la que recae el otorgamiento, a lo que se suma que:

... el sustento según el cual al tenor del literal j) del artículo 13 de la L. 100/1993 se encuentra prohibida la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez, no es admisible, toda vez que al encontrarse ubicado dicho precepto en el libro primero de ese ordenamiento debe entenderse que no abarca lo relacionado con los riesgos laborales, que tienen una regulación diferente y especial. Sentencia SL17447-2014.

Y en la **SL3869-2021**, se reiteró la postura sostenida, entre otros, en los proveídos **SL17477-2017** y **SL4399-2018**, respecto a la compatibilidad pensional de aquellas prestaciones que se financian con aportes de distinta naturaleza, explicando frente a tal restricción normativa:

En cuanto a que el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 prohíbe devengar simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, precisa la Sala que dicha regla tiene aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una pensión de invalidez de origen común y una de vejez, lo que en modo alguno significa que una persona inválida no puede trabajar, como lo afirma Positiva S.A. en su recurso. Nada impide que un pensionado por invalidez de origen común

se reincorpore al mundo laboral y realice aportes con la pretensión de reemplazar su prestación por una de vejez que le brinde mejor bienestar y más calidad de vida.

Por otro lado, no es razonable entender que la regla del artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 es omnicomprendensiva de las pensiones de invalidez de origen común y laboral, puesto que, a diferencia de la primera, la segunda cuenta con una fuente de financiación autónoma, derivada de un esquema típico de seguros, en el cual el tomador -empleador- paga una prima o cotización a una aseguradora -ARL hoy ARP-, la cual debe responder por las prestaciones asistenciales y económicas en caso de verificarse un siniestro -accidente o enfermedad laboral-. Lo anterior descarta cualquier afectación a la sostenibilidad financiera del sistema.

Luego, el hecho de percibir la actora **pensión de invalidez por riesgo laboral**, no le impide al consolidar las exigencias de ley, **el disfrute de la pensión de vejez por riesgo común**, ambas con diferente fuente normativa y financiera. **Se mantiene también la decisión en este apartado** como ya se dijo, al igual que la actualización de los valores adeudados mediante el mecanismo de la indexación, en aras de preservar su poder adquisitivo. También se **conforma** la fecha de disfrute al haberse aplicado correctamente el fenómeno extintivo de la prescripción. **Se adiciona sí, la autorización para el descuento de los aportes a salud a cargo de la actora.**

En lo relativo **al bono pensional**, ha sido reiterada la jurisprudencia especializada en indicar que, **al emitirse y redimirse este, tales recursos integran los dineros que conforman la cuenta de ahorro individual de titularidad del afiliado** y al declararse la ineficacia del traslado del RPM a RAIS **deben trasladarse a Colpensiones**, toda vez que dichos recursos hacen parte de las contribuciones destinadas a financiar las prestaciones pensionales, al tenor del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, y **las particularidades que surjan con posterioridad a los trámites adelantados por las administradoras de pensiones en lo relativo a los bonos pensionales, no**

suponen que se ordene la devolución de dichos valores a quienes lo emitieron, ni tampoco que se disponga una nueva redención de los mismos, sin perjuicio de que, al estar ya redimido dicho título, Colpensiones adelante las gestiones necesarias con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -O.B.P.-, con el fin de establecer las fuentes de financiación de la respectiva pensión y, si es del caso, devolverle a la O.B.P. el valor que corresponda (CSJ AL3713-2021, reiterado en CSJ AL2298-2022, CSJ AL2915-2022 y CSJ AL607-2023, entre otros). Se revoca este apartado, para ajustar la orden al precedente vertical frente al particular.

Sin costas en esta instancia, por conocerse en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.


En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Villanid del Socorro Echavarría Herrera**, contra la **AFP Protección S.A. y Colpensiones**, para indicar que los dineros correspondiente al bono pensional redimido en favor de la citada, actualmente en poder de Protección S.A., hacen parte del capital de su cuenta de ahorro individual, y por tanto también deben ser transferidos a Colpensiones, quedando a cargo de esta entidad – **Colpensiones - adelantar las gestiones necesarias con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -O.B.P.-, con el fin de establecer las fuentes de financiación de la pensión de vejez que se concede y, si es del caso, devolverle a la O.B.P. el valor que corresponda. Se adiciona la autorización a Colpensiones para el descuento del aporte a salud,** sobre las mesadas ordinarias, **a pagar a la actora.**

En lo demás se confirma.

Sin costas en esta instancia, por conocerse en grado especial de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Con aclaración de voto

ACLARACIÓN DE VOTO

Proceso Ordinario Laboral – Ineficacia de traslado

Aunque acojo la decisión de la Sala, resulta necesario aclarar que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no comparto las consideraciones reiteradas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de esta índole, referentes a la nulidad o ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, razón por la cual había adoptado decisiones apartándome razonadamente del criterio de la alta Corporación, en particular del vertido en providencias cuyas consideraciones en su momento no contaban con mayoría, concentrando el análisis en lo dispuesto en la normatividad vigente en la fecha de suscripción del acto jurídico de traslado, respecto a la validez de los actos jurídicos en general y del traslado de régimen en particular, así como las cargas probatorias, y los matices relevantes de las decisiones adoptadas hasta el año 2019, todo ello en virtud de la autonomía e independencia judicial, conforme a las circunstancias fácticas de cada caso, las afirmaciones y condiciones particulares de las partes, y las pruebas allegadas y practicadas en cada proceso, según lo dispuesto en los art. 60 y 61 del CPTSS.

Empero, con ocasión de las decisiones emitidas por la Sala de Casación Laboral de la Alta Corporación (entre muchas, la providencia CSJ STL3201-2020), en las que no solo se dejaron sin efecto las sentencias proferidas en segunda instancia, sino que se exhortó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, (que la suscrita integraba) a acatar el precedente, y a cumplir de manera rigurosa el deber de transparencia y carga argumentativa suficiente al apartarse del precedente judicial emanado de esa Corporación en los asuntos de ineficacia de traslado de régimen, pese a que en todos ellos efectivamente se había cumplido con esa carga; bajo el mandato contenido en el referido exhorto, que fue varias veces reiterado, acompaño la decisión, acatando en todos los asuntos de esta naturaleza, el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral.

Hasta acá, el planteamiento de mi aclaración de voto.



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada